

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, dos (02) de febrero de dos mil veintiuno (2021)

AUTO.

MAGISTRADO PONENTE: JHON ERICK CHAVES BRAVO

ACCIÓN:	EJECUTIVO
EXPEDIENTE:	76001-23-33-000-2021-00069-00
DEMANDANTE:	PROJECT AND BUSINESS MANAGEMENT SAS andres312909@gmail.com
DEMANDADO:	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS SA ESP -ERT ertcali@ert.com.co
ASUNTO	LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO

I. OBJETO DE LA DECISION

Procede el Despacho a decidir si existe mérito para librar mandamiento de pago en contra de la EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P. - ERT, en virtud de la demanda ejecutiva presentada por PROJEK AND BUSINESS MANAGEMENT S.A.S., a través de apoderado judicial debidamente constituido.

II. ANTECEDENTES

La obligación que se pretende recaudar se sustenta en: **i)** audiencia de conciliación celebrada el 5 de diciembre de 2018¹; y, **ii)** auto interlocutorio del 25 de enero de 2019, mediante el cual se aprobó el acuerdo conciliatorio², en el cual se resolvió:

“1.- Aprobar el acuerdo conciliatorio efectuado entre las partes demandante Proyect and Business Management S.A.S. y demandada Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. ESP, en el curso de la Audiencia Inicial celebrada el 05 de diciembre de 2018, en el cual se acordó lo siguiente:

“La Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. ESP reconocerá a la sociedad Project and Business Management S.A.S. la suma de \$760.000.000, pagaderos de la siguiente manera: \$140.000.000 en la última semana del mes de enero de 2019; y los \$620.000.000 restantes en doce cuotas mensuales de \$51.666.667 a partir del mes de febrero de 2019”.

Se advierte, que la demandante no podrá intentar otra Acción por ninguno de los conceptos acá conciliados, en contra de la Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. ESP, salvo para el cobro por la vía ejecutiva de los valores aquí conciliados.

2. Declarar que el **acuerdo conciliatorio** llevado a cabo entre las partes junto con esta providencia que lo aprueba, tiene efectos de **cosa juzgada** y **prestan mérito ejecutivo**.

3. DAR POR TERMINADO EL PRESENTE PROCESO. Comunicar esta decisión al Representante del Ministerio Público Procurador 18 Judicial II delegado ante esta Corporación.

4. Esta conciliación judicial que acaba de ser aprobada se cumplirá de conformidad con las previsiones del mismo acuerdo y de conformidad con los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011”.

¹ Ver folios 10-13.

² Ver folios 18-27.

La decisión anterior quedó debidamente ejecutoriada el 8 de febrero de 2019, tal como consta en la constancia expedida por esta Corporación³.

III. CONSIDERACIONES

3.1 DEL PROCESO EJECUTIVO Y EL TÍTULO EJECUTIVO EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA – REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL:

La Ley 1437 de 2011 no regula de manera integral el trámite del proceso ejecutivo en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por lo tanto, es necesario remitirse al Código General del Proceso y aplicar de manera armónica ambos estatutos procesales, tal y como se explica a continuación.

El artículo 297 CPACA⁴ establece que son títulos ejecutivos: **(i)** las sentencias proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo que condenen a una entidad pública al pago de sumas de dinero; **(ii)** las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que una entidad pública quede obligada al pago de sumas de dinero; **(iii)** el contrato estatal, el acta de liquidación, los documentos en que consten las garantías del contrato —que deberán estar acompañados del acto administrativo que declare el incumplimiento contractual— o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, y **(iv)** las copias auténticas de los actos administrativos que reconozcan un derecho o admitan la existencia de una obligación.

A su vez, el artículo 422 del CGP⁵ establece que son títulos ejecutivos las obligaciones claras, expresas y exigibles que consten en: **(i)** un documento que provenga del deudor o de su causante; **(ii)** una sentencia condenatoria o cualquier otra providencia judicial; **(iii)** las providencias que en los procesos policivos aprueben la liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de justicia, y **(iv)** los demás documentos que expresamente disponga la ley.

Respecto al mandamiento ejecutivo, el artículo 430 del CGP establece que: *“presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal”*.

El presupuesto para el ejercicio de la acción ejecutiva **es la existencia formal y material de un documento o conjunto de documentos que contengan los requisitos de título ejecutivo**, de los cuales surja la certeza legal y judicial del derecho del acreedor y la obligación correlativa del deudor.

³ Ver folio 29.

⁴ Artículo 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.
2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.
3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.
4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar.

⁵ Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.

El título ejecutivo contiene tanto elementos sustanciales como formales. En cuanto a los primeros, se debe verificar si aquél contiene una obligación clara, expresa y exigible al momento de incoarse la demanda. En tal sentido, el Consejo de Estado ha dicho:⁶

1. La obligación es expresa si se encuentra especificada en el título y no es el resultado de una presunción legal o una interpretación normativa.
2. La obligación es clara cuando sus elementos aparecen inequívocamente señalados, sin que exista duda con respecto al objeto o sujetos de la obligación.
3. La obligación es exigible cuando únicamente es ejecutable cuando no depende del cumplimiento de un plazo o condición o cuando dependiendo de ellos ya se han cumplido.

A su turno, la doctrina se ha pronunciado sobre la necesidad de que el título objeto de ejecución sea claro y expreso, en los siguientes términos⁷:

“El ser expresa la obligación, implica un requisito que se puede entender mejor si analizamos etimológicamente el concepto. El vocablo expresar, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, significa “manifestar con palabras lo que uno quiere dar a entender” y expreso lo que es “claro, patente, especificado”,⁸ conceptos que aplicados al del título ejecutivo implican que se manifieste con palabras, quedando constancia, usualmente documental escrita y en forma inequívoca de una obligación; de ahí que las obligaciones implícitas y las presuntas, salvo que la ley disponga lo contrario, no son demandables por vía ejecutiva.⁹

Como complemento se exige, con redundancia, pues se acaba de ver que ser expreso conlleva la claridad, que la obligación sea clara, es decir que sus elementos constitutivos, sus alcances, emerjan con nítida perfección de la lectura misma del título ejecutivo, en fin, que no se necesiten esfuerzos de interpretación para establecer cuál es la conducta que puede exigirse al deudor”.

3.2. PRECISIONES SOBRE LA INADMISIÓN EN EL PROCESO EJECUTIVO POR FALTA DE REQUISITOS FORMALES DE LA DEMANDA:

El Consejo de Estado, Sección Tercera¹⁰ realizó aclaración acerca de la posible inadmisión de la demanda para su corrección en los procesos ejecutivos, en los siguientes términos:

“La Sala ha sostenido que en los procesos ejecutivos no es posible la inadmisión de la demanda para su corrección. En auto del 12 de julio de 2001, Expediente No. 2028, la Sala manifestó lo siguiente:

“En el proceso ejecutivo, a diferencia de los juicios de cognición, la ley enseña que si la demanda y sus anexos son aptos, siempre y cuando exista jurisdicción, se libraré mandamiento de pago y sino se negará el mandamus; este es el sentido del artículo 497 del Código de Procedimiento Civil, pues, expresa que presentada la demanda y acompañada del documento (s) que preste mérito ejecutivo, el juez libraré mandamiento ordenando al demandado para que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere procedente, o en la que aquél considere legal. (...)

En el juicio ejecutivo, el juez carece de competencia para requerir a quien se considera acreedor y a quien éste considera deudor para que allegue el documento (s) que constituye el “título ejecutivo”;

⁶ Consejo de Estado, Sección Cuarta, consejera ponente: Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, auto de 26 de febrero de 2014, radicado: 25000 23 27 000 2011 00178 01 (19250), actor: Clínica del Country S.A. En esta providencia se citó la siguiente doctrina: Velásquez G., Juan Guillermo. *Los procesos ejecutivos*. (2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.

⁷ Código General del Proceso, Parte Especial, Hernán Fabio López Blanco, páginas 507 y 508, DUPRÉ Editores, Bogotá D.C., 2017.

⁸ Real Academia Española de la Lengua, Diccionario de la Lengua Española, 21ª ed. Madrid, 1992, págs. 661.

⁹ Cfr. Hernando MORALES MOLINA, Curso de derecho procesal civil, Parte especial 6ª ed., Bogotá, Edit. ABC, 1973, pág. 75, quien afirma con acierto que no valen, pues, las expresiones meramente indicativas o representativas de la existencia de la obligación, ni tampoco las expresiones presuntas, salvo el caso de la confesión ficta y en éste, únicamente respecto de las preguntas asertóricas formuladas al interrogado que no compareció. Es decir, que las llamadas obligaciones implícitas, esto es, las que están incluidas en el documento (tanto en el escrito como en el documento que contiene la declaración verbal), pero sin que estén expresamente declaradas, no pueden exigirse ejecutivamente.

¹⁰ C.P. MAURICIO FAJARDO GOMEZ, en sentencia del 11/10/2006, Radicación número: 15001-23-31-000-2001-00993-01(30566)

es al ejecutante a quien le corresponde y de entrada demostrar su condición de acreedor; no es posible como si ocurre en los juicios de cognición que dentro del juicio se pruebe el derecho subjetivo afirmado definitivamente en el memorial de demanda”.

Así las cosas, en los procesos ejecutivos **el juez no puede inadmitir la demanda y ordenar al ejecutante corregirla, por ejemplo, aportando los documentos necesarios para configurar el título ejecutivo. No obstante lo anterior, la Sala considera pertinente reiterar que, en el proceso ejecutivo, si bien no es posible inadmitir la demanda para que el ejecutante complete el título presentado, sí lo es para que se corrijan los requisitos formales establecidos en el art. 85 del C.P.C.**

En el proceso ejecutivo nada se prevé sobre este trámite, razón por la cual es necesario remitirse a las disposiciones generales del estatuto procesal civil. Sobre el punto, la doctrina ha afirmado lo siguiente:

“Así, por ejemplo, si la demanda ejecutiva no reúne los requisitos formales o el demandante no adjunta uno de los anexos obligatorios de toda demanda (por ejemplo, la prueba de la existencia y de la representación de la sociedad demandante o de la calidad de heredero en que se cita a una de las partes o copia de la demanda y de sus anexos para el demandado), el juez puede inadmitirla para que se dé cumplimiento a los requisitos que exige la ley. De no hacerse así en el plazo de cinco días, entonces el juez proferirá un auto negando el mandamiento ejecutivo, lo que equivale a rechazar la demanda”¹¹.

En providencia del 16 de junio de 2005¹², **esta Sala acogió la tesis doctrinal según la cual es posible corregir los defectos formales de la demanda pues, lo contrario, implica una rigidez que carece de sustento legal y que se encontraría en contravía del principio constitucional de primacía de la sustancia sobre la forma. De igual manera, implicaría una vulneración del derecho de acceso a la Administración de Justicia, pues, con argumentos meramente formales, se impediría la puesta en marcha del aparato judicial.**

Lo anterior no obsta para que la Sala reitere su posición según la **cual no puede el juez de la demanda ejecutiva, en cualquier caso, inadmitirla con el propósito de permitir al demandante completar, adicionar o mejorar o, en general, variar el título ejecutivo presentado ab initio de modo insuficiente.** (negrillas y subrayas por fuera de texto).

La doctrina¹³ igualmente ha considerado, que solamente en los casos en que no se reúnen los requisitos formales de la demanda, es correcto inadmitirla para que se suplan dichas falencias, lo anterior, en los siguientes términos:

“ Queda así claramente establecido que en el proceso ejecutivo el juez debe aplicar las disposiciones que le permiten inadmitir o rechazar una demanda. Si bien es cierto que el mandamiento ejecutivo no es estrictamente un auto admisorio de la demanda, más por razones de recalcitrante ortodoxia procesal que por motivos prácticos, pues no existe ninguna razón valedera para establecer la diferencia, dentro de la estructura de este proceso es su equivalente; por ello esas **normas generales tienen plena cabida en este proceso especial**, aspecto que reafirma el art. 430 del CGP, al señalar que “Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuera procedente, o en la que aquel considere legal”.

Así, por ejemplo, si la demanda ejecutiva no reúne los requisitos formales o el demandante no adjunta uno de los anexos obligatorios de toda demanda, el juez puede inadmitirla para que se dé cumplimiento a los requisitos que exige la ley. De no hacerse así en el plazo de cinco días, entonces el juez proferirá un auto negando el mandamiento ejecutivo, lo que equivale a rechazar la demanda.

Se debe combatir la tesis según la cual el art. 90 del CGP no es aplicable al proceso de ejecución en cualquiera de sus formas y que lo que procede siempre que no se reúnen alguno de los requisitos formales de la demanda es negar de plano su proferimiento. Quienes la defienden acuden, con criterio exegético, a soluciones facilistas para deshacerse rápidamente de los expedientes, sin reparar en que esas demandas se presentarán de nuevo al reparto, y que, de

¹¹ LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio, “Procedimiento Civil, Parte Especial”, Tomo II, Editorial Dupré, (Bogotá – 2004), pág. 450.

¹² Sección Tercera, Exp. 29238. M.P.: Alier Hernández E.

¹³ LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, “ CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, PARTE ESPECIAL”, Editorial Dupré (Bogotá 2018) pág. 425

otra parte, se cercena el legítimo derecho que asiste al demandante para que se le otorgue la posibilidad de corregir los errores procedimentales que el juez observe, como sucede en los restantes proceso.

Quede entonces claro que en el proceso ejecutivo al analizar la demanda el juez debe controlar que éste reúna todos los requisitos que exigen los arts. 82,83,84,85,88 y 89 del CGP. Si así fuere y además se anexa título ejecutivo, en vez de dictar auto admisorio de la demanda proferirá el denominado mandamiento o mandamiento ejecutivo que es su equivalente.

3.3. DEL PROCEDIMIENTO DEL PROCESO EJECUTIVO:

La Ley 1437 de 2011 no estableció procedimiento para el proceso ejecutivo, pues si bien el artículo 298 se titula “procedimiento”, lo cierto es que en dicho precepto normativo se impone al juez el deber de hacer cumplir las obligaciones contenidas en determinados títulos ejecutivos, mas no se refiere a un genuino procedimiento de ejecución.

Sin embargo, la misma normatividad en su artículo 306 señaló que, en aquellos aspectos no contemplados en el código se seguiría el Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso), en el cual de manera expresa se encuentra el trámite del proceso ejecutivo. La norma mencionada es del siguiente tenor:

“Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.

Así las cosas, se tiene que los procesos ejecutivos administrativos, hoy en día, se deben tramitar por las reglas del proceso ejecutivo de que trata el artículo 422 y siguientes de la Ley 1564 de 2012.

Lo anterior, ha sido posición reiterada del Consejo de Estado¹⁴ al manifestar que el proceso ejecutivo está regulado integralmente por el CGP, y que por ello su desarrollo nace bajo el amparo de dicho estatuto. Sobre este punto ha sostenido:

“ Los trámites que se surtan al interior de todo proceso de ejecución, incluyendo la presentación de excepciones¹⁵, realización de audiencias¹⁶, sustentaciones y trámite de recursos¹⁷, también se sujetarán a las previsiones y formalidades del Código General del Proceso, pues el proceso ejecutivo, se debe desarrollar con base en las disposiciones de éste último estatuto procesal y no del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dado que en la normatividad procesal administrativo, no existen normas o reglas especiales para este proceso especial de cobro ejecutivo. (negritas fuera del texto original)

3.4. CASO CONCRETO:

Como se puede colegir del anterior acápite, para librar mandamiento de pago se debe verificar:

1. Que la demanda fue interpuesta en la jurisdicción y ante el juez competente;
2. Que el término para la presentación de la demanda no haya vencido;
3. Que la demanda formulada por el ejecutante cumpla con los requisitos mínimos señalados en la ley;

¹⁴ CONSEJO DE ESTADO. i) Sección Segunda, Subsección B, radicado 680012333000 2016-01034 01 C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; ii) Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-02814-00 C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, entre otras.-’

¹⁵ Ver artículo 442 de la Ley 1564 de 2012.

¹⁶ Ver artículos 372 y 373 C.G.P.

¹⁷ Ver artículos 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329 y 330 del C.G.P.

4. Que el título judicial sea claro, expreso y exigible, esto es, i) que haya una obligación determinada o determinable; ii) la ejecutante acredite que la obligación está a su favor; iii) se tiene certeza de quién es el deudor; iv) transcurrió el término legal o se cumplió la condición sin que el deudor cumpliera con la obligación que tenía a su cargo.
5. si hay lugar al reconocimiento de intereses o no.

- **DE LA JURISDICCIÓN Y DEL JUEZ COMPETENTE:**

El numeral 9° del artículo 156 del C.P.A.C.A preceptúa que *“En las ejecuciones de las condenas impuestas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o de las obligaciones contenidas en una conciliación aprobada por esta jurisdicción, será competente el juez que profirió la providencia respectiva”*.

En consecuencia, este Despacho es competente para conocer de la demanda ejecutiva, toda vez que realizó la audiencia de conciliación y el auto que aprobó la misma.

- **CADUCIDAD:**

La Ley 1437 de 2011, que regula lo referente a los requisitos de la demanda, establece dentro de su artículo 164 el plazo para la presentación oportuna del libelo introductorio de cada medio de control. Para la caducidad de las demandas incoadas en ejercicio del proceso ejecutivo de títulos derivados del contrato, de decisiones proferidas por la jurisdicción contencioso administrativa en cualquier materia y de laudos arbitrales contractuales del estado de conformidad con el literal (k) de la referida disposición, se estableció un término de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida.

En el presente asunto, la **acción ejecutiva se encuentra vigente** al momento de la presentación de la demanda, pues se interpuso dentro del término señalado en el artículo 164, literal K)., toda vez que el auto de fecha 25 de enero de 2019, que aprobó la conciliación que sirve como base del recaudo ejecutivo, quedó ejecutoriado el 9 de febrero de 2019 y la demanda ejecutiva se presentó el 27 de febrero de 2020, es decir, dentro de los cinco (5) años de que trata la norma en cita.

- **LA DEMANDA FORMULADA POR EL EJECUTANTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS SEÑALADOS EN LA LEY:**

Revisada la demanda, se tiene que los ejecutantes **se encuentran legitimados en la causa por activa**, por ser los beneficiarios del auto que aprobó la conciliación. Por su parte, la parte demandada, se encuentra **legitimada en la causa por pasiva**, por ser quien celebró el acuerdo conciliatorio con la parte ejecutante.

Revisada la demanda, la misma cumple con los requisitos establecidos en los artículos 82 y ss del CGP (designación del juez, nombre y domicilio de las partes, nombre del apoderado, las pretensiones, los hechos fundamento de las pretensiones, se anexó el poder, la audiencia de conciliación celebrada el 5 de diciembre de 2018, el auto del 25 de enero de 2019, que aprobó la conciliación, la constancia de ejecutoria de la precitada providencia y la dirección electrónica del apoderado de la parte ejecutante.

- **QUE EL TÍTULO JUDICIAL SEA CLARO, EXPRESO Y EXIGIBLE, ESTO ES, I) QUE HAYA UNA OBLIGACIÓN DETERMINADA O DETERMINABLE; II) LA EJECUTANTE ACREDITE QUE LA OBLIGACIÓN ESTÁ A SU FAVOR; III) SE TIENE CERTEZA DE QUIÉN ES EL DEUDOR; IV) TRANSCURRIÓ EL TÉRMINO LEGAL O SE CUMPLIÓ LA CONDICIÓN SIN QUE EL DEUDOR CUMPLIERA CON LA OBLIGACIÓN QUE TENÍA A SU CARGO.**

En el caso concreto, el título que se pretende ejecutar se encuentra conformado por el acta de audiencia de conciliación celebrada el 5 de diciembre de 2018 y el auto que aprobó la misma, el cual quedó ejecutoriado el día 8 de febrero de 2019.

En el caso concreto, debe mencionar el Despacho que la obligación es **EXPRESA**, pues consta en el acta conciliación que fue aprobada mediante auto del 25 de enero de 2019, en el que se dispuso

1.- Aprobar el acuerdo conciliatorio efectuado entre las partes demandante Proyect and Business Management S.A.S. y demandada Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. ESP, en el curso de la Audiencia Inicial celebrada el 05 de diciembre de 2018, en el cual se acordó lo siguiente:

“La Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. ESP reconocerá a la sociedad Project and Business Management S.A.S. la suma de \$760.000.000, pagaderos de la siguiente manera: \$140.000.000 en la última semana del mes de enero de 2019; y los \$620.000.000 restantes en doce cuotas mensuales de \$51.666.667 a partir del mes de febrero de 2019”.

Es **CLARA**, pues sus elementos aparecen inequívocamente señalados, sin que exista duda con respecto al objeto o sujetos de la obligación, pues es claro que la efectividad de la obligación debe surtirla la EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P. -ERT a favor de la parte ejecutante por unas sumas y equivalencias determinadas, con sus correspondientes intereses corrientes y moratorios.

Es **EXIGIBLE**, pues el primer pago de la obligación contenida en el acuerdo conciliatorio se debió efectuar a partir de la última semana del mes de enero y del dinero restante, durante los 12 meses siguientes, a partir del mes de febrero de 2019, sin que, según el demandante, a la fecha se haya efectuado el pago de las cuotas correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2019 y enero de 2020. Adicionalmente, el auto que aprobó la conciliación quedó ejecutoriado el 8 de febrero de 2019,

- **RECONOCIMIENTO DE INTERESES:**

Ahora, en cuanto a los intereses moratorios se aplicarán las reglas establecidas en el artículo 192 del CPACA, de conformidad con los criterios que a continuación se señalan:

“Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto, según lo previsto en este Código.

(...)

Cumplidos tres (3) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, cesará la causación de intereses desde entonces hasta cuando se presente la solicitud”.

En el presente asunto, no obra solicitud de cumplimiento de obligación radicada ante la parte ejecutada. Por tanto, los intereses moratorios respecto de las sumas de dinero reconocidas a favor del ejecutante en el auto que aprobó la conciliación entre las partes, de fecha 25 de enero de 2019, deben ser reconocidas teniendo en cuenta que el requerimiento para su pago se está haciendo por vía judicial y, en consecuencia, se tendrá en cuenta el período de cesación de intereses, como así lo determinó el Consejo de Estado¹⁸.

En ese orden de ideas, se procederá a librar mandamiento de pago por concepto de capital adeudado en virtud de las cuotas vencidas en las fechas de 31 de julio, 31 de agosto, 30 de septiembre, 31 de octubre, 30 de noviembre, 31 de diciembre de 2019 y 31 de enero de 2020, cada una por la suma de \$51.666.667,00, para un total de \$361.666.669,00; por intereses de mora sobre las cuotas de capital vencidas, conforme lo establecen los artículo 192-5 y 195 de la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta la cesación de los mismos después de los primeros tres (3) meses de exigibilidad para el pago de las cuotas vencidas y la solicitud de pago por vía judicial cuando ocurra la notificación del auto que libra mandamiento de pago.

Por lo anterior y una vez estudiada la presente demanda ejecutiva por el despacho, se evidencia que esta reúne los requisitos de los artículos 82, 83 y siguientes, del C.G.P. y contiene título con los requisitos legales conforme al artículo 422 Ibídem. El despacho, dando cumplimiento al Art. 430 del C.G.P. por remisión expresa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011,

R E S U E L V E

PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO a favor de PROJECT AND BUSINESS MANAGEMENT S.A.S. y en contra de la EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. ESP – ERT, por concepto de capital adeudado derivado de la obligación contenida en el acuerdo conciliatorio 5 de diciembre de 2018, aprobado mediante auto del 25 de enero de 2019, en virtud de las cuotas vencidas en las fechas de 31 de julio, 31 de agosto, 30 de septiembre, 31 de octubre, 30 de noviembre, 31 de diciembre de 2019 y 31 de enero de 2020, cada una por la suma de \$51.666.667,00, para un total de \$361.666.669,00, así como por intereses de mora sobre las cuotas de capital vencidas, conforme lo establecen los artículo 192-5 y 195 de la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta la cesación de los mismos después de los primeros tres (3) meses de exigibilidad para el pago de las cuotas vencidas y la solicitud de pago por vía judicial cuando ocurra la notificación del auto que libra mandamiento de pago.

SEGUNDO: Se **ADVIERTE** que las sumas ordenadas en los numerales anteriores serán nuevamente objeto de revisión dentro de la oportunidad procesal pertinente.

TERCERO: ORDENAR a la parte ejecutada, que de conformidad con el artículo 431 del Código General del Proceso, **deberá cancelar las anteriores sumas a la parte demandante dentro de los cinco (5) días siguientes al presente proveído, o en su defecto, proponer excepciones en el término de diez (10) días siguientes a la presente decisión.**

CUARTO: NOTIFICAR personalmente la presente providencia a la parte demanda **EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.SP. – ERT** y al señor **AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO** a los buzones de correos electrónicos creados por dichas entidades para efecto de recibir notificaciones judiciales de conformidad con lo establecido en los artículos 197, 198 y 199 del CPACA. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 806 de 2020. La notificación se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje.

¹⁸ Auto del 30 de octubre de 2020, Consejo de Estado, Subsección B, Consejero Ponente Ramiro Pazos Guerrero (radicación 44001233300020160129101).

La parte demandante deberá remitir al correo electrónico rpmemorialestadmvcuca@cendoj.ramajudicial.gov.co, dentro de los CINCO (05) DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación por estado de la presente providencia, la constancia de remisión efectiva de la copia de la demanda, sus anexos y del auto admisorio.

Hasta tanto no se alleguen las constancias anteriormente referidas, no se procederá por la Secretaría de esta Corporación a realizar la notificación personal a los demandados. El incumplimiento de esta carga procesal dará lugar a la aplicación del artículo 178 del CPACA.

QUINTO: RECONOCER personería al abogado DANY ANDRÉS SUÁREZ SÁNCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.061.516 y portador de la Tarjeta Profesional No. 226.205 del C.S.J, para actuar dentro de la acción ejecutiva en nombre y representación de la parte demandante, en los términos del poder conferido.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JHON ERICK CHAVES BRAVO
Magistrado